

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA FUNDACION NOTARIAL SIGNUM PARA PRESTAR UN SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL.

Madrid, 2 de Septiembre de 2018

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según el Acuerdo (núm. 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 y el Real decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

De otra parte, D/D^a. José Ángel Martínez Sanchiz, en nombre y representación de la Fundación Notarial Signum, y como Presidente de la misma, con domicilio en la Calle Ruiz de Alarcón 3 de Madrid.

Ambas partes se reconocen capacidad y legitimación bastante en derecho para celebrar y firmar el presente Convenio de colaboración, y en su virtud,

EXPONEN

PRIMERO.- Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y gobierno del Poder Judicial.

La Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva sobre la mediación) (2016/2066(INI)) recomienda a los estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el recurso a la

mediación en litigios civiles y mercantiles... así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de intercambiar las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo de medidas adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación en relación con la utilidad de la mediación". Por ello, el CGPJ lidera el impulso, la implantación y la coordinación de la Mediación Intrajudicial en toda España, lo que se ha concretado en la firma de 13 Acuerdos Marco de Colaboración en Mediación suscritos por este Consejo con el Ministerio de Justicia y con cada una de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia, así como con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo General de la Abogacía Española y con el Consejo General de Procuradores de España y numerosas instituciones de mediación.

SEGUNDO.- La Fundación Notarial Signum, entidad creada en el año 2011, por el Colegio Notarial de Madrid, tiene como objetivo poner al alcance de la sociedad española un servicio que permita el acceso a esas nuevas formas dinámicas de resolución de conflictos más asequibles, eficaces, confidenciales y con plenas garantías jurídicas.

TERCERO.- La colaboración entre ambas instituciones se ha plasmado ya en la suscripción de varios convenios: el firmado en julio de 2013 para desarrollar la mediación intrajudicial civil en los Juzgados de Madrid, ampliado a la jurisdicción penal en la Audiencia Provincial de Madrid por Adenda de 7 de abril de 2015 y cuya última renovación se acordó en Comisión Permanente de 12 de abril de 2018.

CUARTO.- Las partes han considerado la necesidad de modificar y adecuar estos convenios a la legislación vigente, en aras a mantener e impulsar estas líneas de colaboración entre ambas instituciones.

Por ello, acuerdan suscribir este Convenio, que se regirá por las siguientes,

CLAÚSULAS

PRIMERA.-Objeto.

Este Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración a desarrollar entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Notarial Signum, para la implantación de la mediación intrajudicial en el ámbito civil y penal en los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid.

SEGUNDA.- Principios básicos de la mediación y Protocolo de Actuación.

A- El programa de mediación familiar se ajustará a los principios básicos de la mediación:

- 1.- Voluntariedad.
- 2.- Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.
- 3.- Neutralidad.
- 4.- Confidencialidad.

B- Las mediaciones seguirán como Protocolo las Guías de Mediación civil y penal del Consejo General del Poder Judicial, adaptadas de común acuerdo, entre los jueces y mediadores involucrados en este proyecto, a las concretas necesidades de la localidad donde se preste el servicio y aprobados por la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid.

Los partícipes en el proceso mediador procederán a la cumplimentación voluntaria de una encuesta sobre el grado de satisfacción del servicio de mediación.

TERCERA.- Compromisos asumidos por las partes.

A. Corresponde al CGPJ:

1. Facilitar el conocimiento y uso de la mediación por los jueces y magistrados en los procesos en que resulte un método adecuado. .
2. Remover obstáculos para la colaboración institucional o corporativa necesaria para la puesta en marcha de la iniciativa.
3. Recoger los datos correspondientes al resultado de la actividad mediadora, analizarlos y valorarlos con el fin de lograr un buen desarrollo de la implantación de los proyectos de mediación.
4. Colaborar con la otra parte para lograr que los datos recogidos y analizados sean totalmente fiables.
5. Velar para que la mediación Intrajudicial responda a unos estándares de calidad.
6. Promover la suscripción de Códigos de Conducta de los mediadores.

B. Corresponde a la Fundación Notarial Signum.

1. Prestar el servicio de mediación Intrajudicial en los órganos judiciales civiles y penales de la Comunidad de Madrid en la forma que se establece en este convenio y en los protocolos de desarrollo.
2. Garantizar que los equipos de mediación se compongan de profesionales mediadores que cumplan los requisitos establecidos legalmente y estén inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia regulado por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de mediación.
3. La Fundación Notarial Signum se compromete a llevar a cabo la mediación penal de manera totalmente gratuita. En la jurisdicción civil, se cubrirá gratuitamente la mediación para aquellas personas que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita según lo regulado en la legislación vigente, siendo en todo caso gratuita la sesión informativa. La Fundación Notarial Signum podrá obtener financiación de otros organismos y entidades para la realización de todos estos servicios.
4. Enviar semestralmente la ficha de recogida de datos al CGPJ.

CUARTA.- Financiación.

El presente convenio no conllevará gasto alguno para el Consejo General del Poder Judicial.

QUINTA.- Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos anuales, a cada una de las partes intervinientes.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

- a) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente Convenio.

- b) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.
- c) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.
- d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.
- e) Interpretar el Convenio y resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49. f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.c) y 52.3 de la mencionada Ley.

Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Seguimiento, a cuyos efectos la Presidencia, en su caso, tendrá facultades de decisión dirimente.

SEXTA.- Vigencia y eficacia del Convenio.

El presente Convenio, se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma y tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de aquella.

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, las partes podrán acordar únicamente la prórroga del convenio por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escriptorio unilateral, comunicado recíprocamente.

Este convenio deroga el convenio suscrito anteriormente entre las mismas instituciones.

SÉPTIMA.- Modificación, resolución y extinción del Convenio

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa, que deberá ser suscrita por las mismas autoridades que el presente Convenio.

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

1. El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
 - a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
 - b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
 - c) La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.
 - d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

- e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del Convenio.
- g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

OCTAVA.- Protección de datos.

Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Las partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo.

Los/las titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento.

NOVENA.- Confidencialidad.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de la normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, lo que, por parte del Consejo General del Poder Judicial se traduce en la necesidad de publicar los convenios en la web del Consejo General del Poder Judicial.

DÉCIMA.- Régimen Jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del Título Preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se encuentra excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- Obligación de cumplimiento de los compromisos.

En caso de finalización del presente Convenio, cualquiera que sea la causa, las partes se comprometen a concluir las obligaciones y compromisos pendientes asumidos con anterioridad a la fecha de finalización del mismo.

CLÁUSULA FINAL.-

La firma del presente Convenio no excluye el establecimiento, la ampliación de relaciones de colaboración o la firma de Convenios de similar naturaleza, en el ámbito de la mediación y demás ADR , con otras entidades o instituciones.


Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha ut supra.

**POR EL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL**



Carlos Lesmes Serrano

**POR LA FUNDACION NOTARIAL
SIGNUM**



José Ángel Martínez Sanchiz